



Asamblea General

Distr. general
25 de noviembre de 2020
Español
Original: inglés

Consejo de Derechos Humanos Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria

Opiniones aprobadas por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria en su 88º período de sesiones, 24 a 28 de agosto de 2020

Opinión núm. 60/2020, relativa a Maria Lazareva (Kuwait)*

1. El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria fue establecido en virtud de la resolución 1991/42 de la Comisión de Derechos Humanos. En su resolución 1997/50, la Comisión prorrogó y aclaró el mandato del Grupo de Trabajo. Con arreglo a lo dispuesto en la resolución 60/251 de la Asamblea General y en la decisión 1/102 del Consejo de Derechos Humanos, el Consejo asumió el mandato de la Comisión. La última vez que el Consejo prorrogó el mandato del Grupo de Trabajo por tres años fue en su resolución 42/22.

2. De conformidad con sus métodos de trabajo (A/HRC/36/38), el Grupo de Trabajo transmitió el 19 de julio de 2019 al Gobierno de Kuwait una comunicación relativa a Maria Lazareva. El Gobierno respondió a la comunicación el 4 de septiembre de 2019 y el 14 de octubre de 2019. El Estado es parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

3. El Grupo de Trabajo considera arbitraria la privación de libertad en los casos siguientes:

a) Cuando es manifiestamente imposible invocar fundamento jurídico alguno que la justifique (como el mantenimiento en reclusión de una persona tras haber cumplido su condena o a pesar de una ley de amnistía que le sea aplicable) (categoría I);

b) Cuando la privación de libertad resulta del ejercicio de los derechos o libertades garantizados por los artículos 7, 13, 14, 18, 19, 20 y 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y, respecto de los Estados partes, por los artículos 12, 18, 19, 21, 22, 25, 26 y 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (categoría II);

c) Cuando la inobservancia, total o parcial, de las normas internacionales relativas al derecho a un juicio imparcial, establecidas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los instrumentos internacionales pertinentes aceptados por los Estados interesados, es de una gravedad tal que confiere a la privación de libertad carácter arbitrario (categoría III);

d) Cuando los solicitantes de asilo, inmigrantes o refugiados son objeto de detención administrativa prolongada sin posibilidad de examen o recurso administrativo o judicial (categoría IV);

e) Cuando la privación de libertad constituye una vulneración del derecho internacional por tratarse de discriminación por motivos de nacimiento, origen nacional, étnico o social, idioma, religión, condición económica, opinión política o de otra índole,

* Seong-Phil Hong no participó en el examen del presente caso.



género, orientación sexual, discapacidad u otra condición, que lleva o puede llevar a ignorar el principio de igualdad de los seres humanos (categoría V).

Información recibida

Comunicación de la fuente

4. Maria Lazareva es ciudadana de la Federación de Rusia, nacida en 1973. Reside en Al-Farwaniyah (Kuwait). La Sra. Lazareva se trasladó a Kuwait en 2004 para trabajar como Jefa de Desarrollo Estratégico de una empresa de logística llamada Kuwait and Gulf Link Transportation Company. En 2007, fue nombrada Vicepresidenta y Directora General de esa empresa.

a) Detención y reclusión

5. Según se informa, la Sra. Lazareva fue detenida y recluida en enero, agosto y septiembre de 2016 y en enero de 2017 para ser interrogada en relación con las denuncias de un antiguo empleado que la acusaba, entre otras cosas, de apropiación indebida de fondos públicos y de blanqueo de dinero. La fuente informa de que en todas las ocasiones los interrogatorios duraron hasta 8 horas (excepto en una de ellas, en que llegó a las 12 horas) y que en ellos no se le permitió descansar adecuadamente, se le negó toda comodidad y no se atendieron sus necesidades básicas, como alimentos y agua. Además, el 18 de enero de 2016 el Fiscal General impuso a la Sra. Lazareva la prohibición de viajar, que se mantuvo hasta el 7 de febrero de 2017 y solo se levantó después de que esta obtuviera una orden judicial. El Fiscal General presentó otro escrito de acusación al tribunal penal de Kuwait el 26 de abril de 2017. Los delitos que se le imputaban coincidían, en esencia, con las acusaciones formuladas por el antiguo empleado de la empresa, a saber, mala gestión y apropiación indebida de fondos públicos de Kuwait.

6. La fuente explica que la Sra. Lazareva fue detenida nuevamente el 28 de noviembre de 2017 en el marco de una serie de causas penales relacionadas con su trabajo en el Fondo Portuario, un vehículo de inversión gestionado por la empresa¹. En el escrito de acusación, fechado el 19 de diciembre de 2017, se acusaba a la Sra. Lazareva y a otras personas de ayudar al ex Director Financiero de la Autoridad Portuaria de Kuwait a malversar fondos públicos. En concreto, se alegaba que la Sra. Lazareva había firmado tres documentos en los que se exigía el pago de servicios de asesoramiento que supuestamente nunca se habían prestado, con el presunto objeto de facilitar la transferencia ilícita de 9 millones de dinares (alrededor de 30 millones de dólares de los Estados Unidos) de la Autoridad Portuaria de Kuwait a la empresa.

7. La fuente explica que la defensa de la Sra. Lazareva solicitó su libertad provisional con fianza en varias ocasiones². Finalmente, se aceptaron esas solicitudes el 4 de febrero de 2018, previo pago de 9 millones de dinares junto con otro coacusado. La Sra. Lazareva y el otro coacusado depositaron esa suma en el tribunal el 7 de febrero de 2018. La fuente señala que la cuantía de la fianza era más elevada de lo habitual; de hecho, hasta entonces nunca se había impuesto una fianza tan alta en Kuwait.

8. La fuente informa de que en repetidas ocasiones se negó a la defensa de la Sra. Lazareva el acceso al expediente de la fiscalía y a las declaraciones de los testigos aportadas como pruebas. La fuente especifica que, en diferentes vistas³, el tribunal rehusó pronunciarse sobre la solicitud de la Sra. Lazareva de consultar y examinar las pruebas del caso. En vez de ello, aplazó las vistas. Además, la fuente informa de que, el 22 de abril de 2018, el tribunal permitió a la defensa interrogar a un solo testigo de cargo, un funcionario de la Oficina Estatal de Auditoría, sin el beneficio de poder acceder a las pruebas más allá de las alegaciones que figuraban en el escrito de acusación. En la vista celebrada el 29 de abril de 2018, el tribunal volvió a rehusar pronunciarse sobre la solicitud de acceder a las pruebas

¹ Causas núms. 1496/2012, 547/2013, 1719/2014, 1942/2015 y 1596/2018.

² Las solicitudes se presentaron el 14 de diciembre de 2017, el 24 de diciembre de 2017 y el 14 de enero de 2018.

³ Las vistas en cuestión se celebraron el 18 de febrero de 2018, el 1 de abril de 2018, el 22 de abril de 2018 y el 29 de abril de 2018.

y señaló para el 6 de mayo de 2018 la siguiente vista, en la que resolvería sobre las solicitudes de documentos. Sin embargo, según se informa, en lugar de atender la solicitud de consultar y examinar de las pruebas, ese día el tribunal concluyó las actuaciones y dictó una sentencia en la que se condenaba sumariamente a la Sra. Lazareva en la causa núm. 1942/2015 y se ordenaba su ingreso inmediato en prisión. La fuente explica que la Sra. Lazareva fue condenada a una pena de diez años de prisión y trabajos forzados. Junto con el otro coacusado, también fue condenada a pagar 11 millones de dinares en concepto de daños y perjuicios y una multa de 22 millones de dinares.

9. La fuente afirma que, en un informe pericial detallado de diciembre de 2018, se refutan todas las acusaciones de conducta ilícita formuladas por la fiscalía en esas causas y se concluye que las actividades en cuestión eran transacciones comerciales legítimas. Sin embargo, al parecer el Fiscal General se ha negado a aceptar estas pruebas y no se ha permitido que el tribunal de primera instancia las incorpore al expediente.

10. Según la fuente, el 19 de junio de 2018, poco después de su condena y de haber pagado una fianza de 9 millones de dinares el 7 de febrero de 2018, la Sra. Lazareva y su coacusado pagaron otros 2 millones de dinares⁴. Lo hicieron para tratar de lograr su puesta en libertad bajo fianza en espera de que se resolviera su apelación en otra causa⁵. A pesar de estos pagos, no se puso en libertad a la Sra. Lazareva ni al otro coacusado.

11. La fuente indica que la defensa de la Sra. Lazareva recurrió la sentencia del tribunal y ha solicitado reiteradamente su puesta en libertad provisional con fianza en espera de que se resuelva el recurso⁶. Estas solicitudes no fueron examinadas por el tribunal, que, o bien las rechazó verbalmente de manera sumaria, o bien se limitó a no tratarlas en las vistas. Además, no hay pruebas de que la fiscalía se haya opuesto nunca a ninguna de esas solicitudes.

12. La fuente explica que, en un procedimiento civil paralelo, el juez resolvió en otro sentido el 25 de marzo de 2019.

13. En cuanto al proceso de apelación, la fuente afirma que, igual que sucedió durante el proceso ante el tribunal de primera instancia, se denegaron los derechos humanos básicos de la Sra. Lazareva. Se le denegó en repetidas ocasiones el acceso a las pruebas y no se le permitió llamar a declarar a ningún testigo de descargo ni interrogar a los testigos de cargo sin injerencias del magistrado presidente. Según se informa, en una vista ante el tribunal de apelación celebrada el 10 de marzo de 2019, se oyó accidentalmente al magistrado presidente decir que no se pondría en libertad a la Sra. Lazareva y al otro coacusado ese día. El tribunal de apelación también escuchó ese mismo día el testimonio de un antiguo empleado que admitió que se habían utilizado documentos falsificados como prueba contra la Sra. Lazareva, pero el magistrado presidente no tomó ninguna medida a ese respecto. En una vista celebrada el 24 de marzo de 2019, el tribunal de apelación denegó una solicitud de puesta en libertad de la Sra. Lazareva, impidió que se imprimiera una serie de documentos electrónicos para que la defensa los pudiera examinar y permitió que se interrogara a dos testigos a puerta cerrada sin que la Sra. Lazareva y el otro coacusado estuvieran presentes.

14. Además, la fuente explica que, durante la apelación, el letrado de la Sra. Lazareva intentó en dos ocasiones, el 21 y el 28 de abril de 2019, que el tribunal de apelación escuchara la declaración de dos testigos de descargo. El 21 de abril de 2019, el magistrado presidente del tribunal de apelación anunció que se inhibiría de la causa, sin exponer los motivos. Más adelante desistió de la inhibición, de nuevo sin dar razones, y presidió las vistas posteriores, celebradas el 28 de abril de 2019 y el 5 de mayo de 2019. El 5 de mayo de 2019, el tribunal de apelación decidió anular la sentencia condenatoria del tribunal de primera instancia y ordenó la puesta en libertad de la Sra. Lazareva, con la condición de que depositara otros 20 millones de dinares (aproximadamente, 65 millones de dólares de los Estados Unidos) en

⁴ Se exigió este pago para que la suma total depositada en el tribunal ascendiera a 11 millones de dinares, cuantía de la indemnización por daños y perjuicios acordada.

⁵ Causa núm. 1596/2018.

⁶ Las solicitudes se presentaron el 16 de mayo de 2018 (examinada el 24 de mayo de 2018), el 7 de junio de 2018, el 5 de agosto de 2018, el 13 de agosto de 2018, el 26 de agosto de 2018, el 7 de enero de 2019, el 27 de enero de 2019, el 10 de marzo de 2019, el 24 de marzo de 2019, el 21 de abril de 2019 y el 28 de abril de 2019.

concepto de fianza. Esta cantidad se sumaba a los 11 millones de dinares que ya había abonado al tribunal. Este mantuvo la prohibición de viajar y señaló otra vista para el 9 de junio de 2019.

15. La fuente afirma que, a lo largo de todas las actuaciones, la Sra. Lazareva ha sufrido una pauta de trato arbitrario en Kuwait, con repetidas detenciones y reclusiones arbitrarias, agravada por la imposición de prohibiciones de viajar.

16. En primer lugar, la fuente recuerda que la Sra. Lazareva fue recluida en varias ocasiones entre 2015 y 2017 a instancias del Fiscal General. También fue interrogada en enero y septiembre de 2016 y puesta en libertad sin que se presentasen cargos formales. Durante los períodos en que no estaba recluida, fue sometida a vigilancia. Las autoridades kuwaitíes también le impusieron la prohibición de viajar en cuatro períodos distintos.

17. La fuente afirma que existe preocupación por el trato que ha recibido el abogado kuwaití que representa a la Sra. Lazareva, ya que se han iniciado actuaciones penales contra él por “insultar a un investigador del Estado”. La fuente sostiene que está siendo procesado simplemente por haber tratado de poner fin a la conducta poco profesional de un investigador, planteando dudas sobre la imparcialidad del juicio.

18. Según la fuente, durante las actuaciones ha habido otros problemas de derechos humanos. En concreto, se refiere al hecho de que no se informó de los delitos presuntamente cometidos en el momento de la detención y a las condiciones en que se interrogó a la Sra. Lazareva. Cuando la detuvieron no le mostraron ninguna de las pruebas materiales en las que se basaba la acusación.

19. Además, la fuente afirma que en todo momento se ha negado a la Sra. Lazareva la posibilidad de consultar con sus abogados y preparar su defensa. De hecho, cuando la detuvieron e interrogaron por primera vez en 2017, no le permitieron reunirse con sus abogados durante un tiempo suficiente para tener una oportunidad justa y cabal de que se le explicaran los cargos que se le imputaban y diera instrucciones a sus abogados. También se excluyó a sus abogados de algunos de los primeros interrogatorios. La fuente informa asimismo de que, en el marco de dos juicios penales⁷, la Sra. Lazareva recibió una gran cantidad de documentos relativos a la causa (hasta 18.000 páginas). No obstante, su equipo legal dispuso de menos de una semana para examinar estas pruebas documentales antes de que el tribunal, sin previo aviso, concluyera las actuaciones y dictara sentencia condenatoria el 6 de mayo de 2018. Algunos de los documentos se proporcionaron únicamente en formato electrónico y no se facilitaron a la Sra. Lazareva los medios necesarios para examinarlos. No se le permitió utilizar una computadora portátil confidencial para examinar los documentos electrónicos ni se le proporcionaron copias impresas. Por lo tanto, no ha podido examinar adecuadamente las abundantes pruebas presentadas ni consultar debidamente con sus abogados al respecto.

20. Por otra parte, la fuente alega que la Sra. Lazareva no ha dispuesto en la cárcel de instalaciones adecuadas para poder realizar consultas confidenciales con su abogado de manera que este pudiera preservar el secreto profesional.

21. La fuente indica que no se han proporcionado a la Sra. Lazareva traducciones adecuadas de los materiales, esto es, traducciones al inglés de los documentos en árabe, siendo el inglés el idioma común de la defensa. Solo después de su condena, en una vista celebrada en enero de 2019, el tribunal de apelación autorizó que los documentos se tradujeran únicamente al ruso, corriendo con los gastos la Sra. Lazareva. Por lo tanto, según la fuente, esa orden del tribunal, en vez de facilitar su derecho a un juicio imparcial, en realidad menoscabó su derecho a comprender las presuntas pruebas en su contra.

22. La fuente aduce que la Sra. Lazareva no ha sido puesta en libertad provisional con fianza ni ha tenido oportunidades adecuadas para impugnar su prisión provisional. Según la fuente, se le denegó la libertad provisional con fianza durante más de dos meses. Después, fue puesta en libertad provisional con fianza durante un breve período, entre el 7 de febrero de 2018 y la condena penal del 6 de mayo de 2018, tras haber pagado 9 millones de dinares.

⁷ Causa núm. 1942/2015, en el que ha sido condenada; y otros asuntos penales independientes pero relacionados, como la causa núm. 1496/2012, que aún están pendientes.

La fuente asegura que, durante todo ese tiempo, la Sra. Lazareva cumplió las condiciones que le imponía la libertad provisional con fianza. Tras su condena, se le denegó la libertad provisional mientras se resolvía su apelación, a pesar de que, junto con el otro coacusado, había pagado al tribunal una suma equivalente a la indemnización por daños y perjuicios decretada —los 9 millones de dinares de la fianza decretada el 4 de febrero de 2018 más los otros 2 millones de dinares pagados el 19 de junio de 2018 en espera de que se resolviera su apelación— y ello a pesar de que no había riesgo de fuga y de que hasta la fecha ha cumplido todas las órdenes del tribunal y las restricciones de viaje. A título ilustrativo, la fuente explica que, estando en Europa, la Sra. Lazareva regresó voluntariamente a Kuwait en abril de 2017 para hacer frente a los cargos que se le imputaban. Los repetidos intentos de impugnar la necesidad de su permanencia en prisión no obtuvieron ningún resultado. El 5 de mayo de 2019, el tribunal de apelación anuló la sentencia condenatoria dictada en primera instancia pero ordenó que la Sra. Lazareva y el otro coacusado permanecieran en prisión en espera de que se resolviera el recurso interpuesto, a no ser que ambos efectuaran sendos pagos de 20 millones de dinares en concepto de fianza, lo que constituía una cantidad sin precedentes.

23. Por otra parte, la fuente afirma que la condena de la Sra. Lazareva se basó en pruebas insuficientes y que esta no pudo tener una defensa completa y adecuada en el juicio. Para apoyar esta afirmación, la fuente recuerda que, en la causa en que fue condenada⁸, la fiscalía solo presentó un testimonio pericial, el de un auditor del Estado. La Sra. Lazareva alega que los documentos en los que se basó su condena son falsos, pero no se permitió realizar un análisis forense de estos y la fiscalía ha admitido que no puede presentar los documentos originales, sino únicamente fotocopias. En la vista del 10 de marzo de 2019 ante el tribunal de apelación, un empleado admitió que los documentos que se habían utilizado como prueba contra la Sra. Lazareva habían sido falsificados. La fuente informa de que ni el juez del tribunal de primera instancia ni el magistrado presidente del tribunal de apelación permitieron al abogado defensor interrogar al testigo de cargo. Tampoco se permitió a la defensa acceder con antelación a la documentación para preparar un eventual interrogatorio de los testigos de la otra parte, en caso de que se hubiera autorizado. Si se hubiera dado a la Sra. Lazareva la oportunidad de defenderse adecuadamente a través de su abogado en el juicio, se habría puesto de manifiesto ante el tribunal la naturaleza problemática de las pruebas y no habría habido ningún fundamento para su condena. El problema relativo a su capacidad de organizar su defensa también se ve agravado por el enjuiciamiento penal de su abogado, como se ha explicado anteriormente.

b) Análisis jurídico

24. La fuente sostiene que la reclusión de la Sra. Lazareva constituye una privación arbitraria de libertad que se inscribe en las categorías I y III, ya que Kuwait no ha respetado las normas internacionales relativas al derecho a un juicio imparcial establecidas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el que Kuwait es parte.

i) Categoría I

25. Según la fuente, la Sra. Lazareva ha sido condenada y privada de libertad en el marco de las investigaciones penales relacionadas con la causa núm. 1942/2015.

26. La fuente informa de que, en un principio, a la Sra. Lazareva se le denegó la libertad provisional con fianza que sí se les concedió a los demás acusados (fijando la fianza en 5.000 dinares). No se dio ninguna razón para que recibiera un trato diferente, a pesar de que los cargos eran los mismos y de que siempre había cumplido las prohibiciones de viajar y no había riesgo de fuga. Fue puesta en libertad provisional con fianza durante un breve período en febrero de 2018 —hasta su condena en mayo de 2018—, previo pago de 9 millones de dinares junto con el otro coacusado, lo que supone una fianza muy superior a las impuestas a los demás acusados. Hasta entonces nunca se había impuesto una fianza tan elevada en Kuwait. Después de la condena permaneció en prisión en espera de que se resolviera la apelación, pese a haber pagado al tribunal otros 2 millones de dinares junto con el otro coacusado. Con este pago, la suma total abonada a los tribunales ascendió a 11 millones de

⁸ Causa núm. 1942/2015.

dinares. Sus repetidos intentos de impugnar su mantenimiento en prisión no obtuvieron resultados, a pesar de que no había razón para ello con arreglo al derecho interno. Además, cabe cuestionar si su reclusión inicial se ajustó al derecho interno, dado que no se decretó la prisión preventiva de otros acusados.

27. En cuanto a la legalidad de la reclusión, según la fuente, la prisión preventiva y la continuación de la reclusión después de la condena mientras se resolvía la apelación no se ajustan al derecho kuwaití ni al derecho internacional. La fuente sostiene que la prisión preventiva no era razonable ni necesaria en circunstancias en las que otros acusados no permanecían detenidos en espera de juicio y dado que no se habían proporcionado motivos que justificasen la reclusión de la Sra. Lazareva. Además, la continuación de la reclusión en espera de que se resolviese su apelación era completamente injustificada, puesto que se decretó una fianza y esta se pagó. Por último, se fijó una fianza excesiva y poco realista que no tiene precedentes ni ofrece ninguna alternativa real a la reclusión. Se podrían haber impuesto medidas no privativas de la libertad menos constrictivas, como unas condiciones de libertad provisional que impidiesen su huida de Kuwait y requisitos de comparecencia personal, si es que esa cuestión suscitaba preocupación. Kuwait no ha aportado pruebas que confirmen esa preocupación y que expliquen por qué no hay alternativas a la prisión preventiva y por qué la cuantía de la fianza fijada es necesaria para garantizar la comparecencia de la Sra. Lazareva en el juicio, cuando esta no presenta riesgo de fuga. En tales circunstancias, su detención es arbitraria con arreglo al artículo 9, párrafo 1, del Pacto.

28. La fuente sostiene que parece que se le está negando a la Sra. Lazareva la oportunidad de impugnar adecuadamente la legalidad de su reclusión. No hay indicios de que el tribunal kuwaití haya sopesado adecuadamente la posibilidad de ponerla en libertad provisional con fianza. Esto constituye una violación del derecho que la asiste, en virtud del artículo 9, párrafo 4, de recurrir ante un tribunal, a fin de que este decida sobre la legalidad de su prisión continuada.

29. La fuente afirma que es probable que, además de su puesta en libertad, la Sra. Lazareva tenga derecho a una indemnización por las violaciones del artículo 9 por parte de Kuwait.

ii) Categoría III

30. En cuanto al derecho a un juicio imparcial, la fuente sostiene que a la Sra. Lazareva se le impidió estar presente en una vista ante el tribunal de primera instancia celebrada el 14 de enero de 2018. El tribunal de apelación tampoco permitió que se interrogara a un testigo en vista pública en presencia de los acusados, y en cambio autorizó que el interrogatorio se realizara únicamente a puerta cerrada.

31. Según la fuente, hay indicios de que se vulneró el derecho a un juicio imparcial consagrado en el artículo 14 del Pacto. El derecho de la Sra. Lazareva a que se presumiera su inocencia se vio sustancialmente menoscabado al denegársele, de forma discriminatoria, la libertad provisional con fianza en circunstancias en las que, en principio, no había diferencia alguna entre ella y los demás acusados, al decretar su prisión preventiva y mantenerla recluida después de su condena sin justificación y al fijar en su caso una fianza de una cuantía sin precedentes.

32. La fuente sostiene que las dudas planteadas con respecto a las pruebas muestran claramente que no hay un fundamento creíble para condenar a la Sra. Lazareva ni para seguir enjuiciándola. Estas dudas demuestran que la fiscalía no cumplió su obligación de presentar pruebas que justificaran siquiera su enjuiciamiento, y menos aún su condena. Esta omisión vulneró el derecho de la Sra. Lazareva a la presunción de inocencia.

33. La fuente alega que hay claros indicios de que no se permitió a la Sra. Lazareva organizar adecuadamente su defensa: a) Kuwait no le facilitó la documentación del caso con antelación suficiente ni unas instalaciones adecuadas a fin de poder examinarla con su abogado antes del juicio; b) Kuwait no le proporcionó esa documentación en un idioma que ella pudiera comprender; c) Kuwait no puso a su disposición unas instalaciones adecuadas para que pudiese celebrar consultas confidenciales con sus abogados; d) el tribunal de primera instancia no permitió a la defensa interrogar a los testigos ni comprobar debidamente

las pruebas en su contra; y e) ni el tribunal de primera instancia ni el tribunal de apelación permitieron a la Sra. Lazareva presentar testigos de descargo, incluidos peritos.

34. La fuente sostiene que el enjuiciamiento del abogado defensor de la Sra. Lazareva por actos realizados en desempeño de sus funciones profesionales de defensa plantea serias dudas en cuanto a si Kuwait está intentando negarle el derecho a la defensa y a ser defendida por un abogado de su elección.

35. Por último, la fuente expresa su preocupación por la imparcialidad e independencia del tribunal que conoció de la causa de la Sra. Lazareva. El 5 de mayo de 2019, el juez de apelación revocó su condena y decretó el pago de una fianza exorbitante, a pesar de que con anterioridad se había inhibido en una vista celebrada el 21 de abril de 2019, sin exponer los motivos. Sin embargo, el mismo juez volvió a hacerse cargo de la causa en la vista del 28 de abril de 2019 y aplazó la sentencia hasta el 5 de mayo de 2019, sin explicar por qué volvía a entender que gozaba de independencia suficiente para conocer de la causa. La fuente considera este hecho particularmente preocupante dado el carácter punitivo y *sui generis* de la fianza que el juez fijó para su puesta en libertad provisional y habida cuenta de que el mismo juez presidiría la siguiente vista, el 9 de junio de 2019.

36. La fuente concluye que es probable que esas circunstancias constituyan una violación por parte de Kuwait del artículo 14 del Pacto y equivalgan a una privación arbitraria de la libertad con arreglo a la categoría I.

37. La fuente sostiene que las violaciones del derecho a un juicio imparcial y a las debidas garantías procesales que sufrió la Sra. Lazareva son lo suficientemente graves como para conferir a la privación de libertad carácter arbitrario con arreglo a la categoría III, por los mismos motivos por los que se inscribe en la categoría I.

c) Adición a la comunicación

38. La fuente explica que la Sra. Lazareva fue puesta en libertad provisional con fianza el 12 de junio de 2019. Siguen siendo muy preocupantes el trato dispensado a la Sra. Lazareva tras su puesta en libertad provisional con fianza, los procedimientos en curso contra ella y la perspectiva de que vuelva a ser recluida de manera arbitraria.

39. Según la fuente, la reclusión de la Sra. Lazareva del 5 de mayo al 2 de junio de 2019 carecía de fundamento jurídico en el derecho kuwaití y, por consiguiente, fue ilegal. De hecho, cuando se anuló la condena de la Sra. Lazareva el 5 de mayo de 2019, el tribunal de apelación no dictó un nuevo auto de prisión, como se requería en esas circunstancias. En consecuencia, la Sra. Lazareva debería haber sido puesta en libertad (de conformidad con los artículos 224 y 226 de la Ley núm. 17 de 1960), pero no fue así. Solo después de que se anunciara públicamente la presentación de la denuncia, el tribunal de apelación, en una vista no programada que se celebró el 2 de junio de 2019, dictó *a posteriori* un auto de prisión contra la Sra. Lazareva. En estas circunstancias, la imposición de una fianza de 20 millones de dinares por parte del tribunal, el 5 de mayo de 2019, muestra además su intención de privar efectivamente a la Sra. Lazareva de su libertad, a pesar de carecer de los fundamentos jurídicos necesarios para hacerlo con arreglo a derecho.

40. Con el auto de prisión que dictó el 2 de junio de 2019, el tribunal de apelación reconoció que no existía ningún auto de prisión válido que justificara los 28 días anteriores que la Sra. Lazareva había permanecido en prisión. La fuente sostiene que el auto dictado con carácter retroactivo no cambia el hecho de que, tras la anulación de su condena, la Sra. Lazareva permaneció recluida ilegalmente. Además, el tribunal no dio ninguna razón para decretar la reclusión de la Sra. Lazareva. Según la fuente, ello hizo que se vulnerara el derecho de toda persona en espera de juicio a no ser recluida mientras no exista condena por la vía penal, ya que la reclusión se reserva únicamente para circunstancias excepcionales. En este caso, dado que las circunstancias de la Sra. Lazareva no habían cambiado desde su primera condena, no había fundamento jurídico ni procesal en el derecho kuwaití para que esta permaneciera en prisión preventiva tras la anulación de su condena.

41. Además de dictar auto de prisión contra la Sra. Lazareva, el tribunal de apelación redujo considerablemente la cuantía de la fianza exigida en el auto judicial dictado el 5 de mayo de 2019, de 20 millones de dinares, y la fijó en 1 millón de dinares. La Sra. Lazareva

no pudo ser puesta en libertad provisional con fianza hasta el 12 de junio de 2019, cuando sus partidarios le prestaron el millón de dinares adicionales que debía pagar.

42. La fuente sostiene que, a pesar de la puesta en libertad provisional con fianza de la Sra. Lazareva, se han producido nuevos retrasos en su caso, lo que hace que se sigan vulnerando sus derechos fundamentales.

43. La fuente explica que el tribunal aplazó la vista señalada para el 9 de junio de 2019 al 23 de junio de 2019 e indicó que se celebraría una vista definitiva para que la defensa expusiera sus argumentos y que se dictaría sentencia unos días después. En la vista celebrada el 23 de junio de 2019, el tribunal aplazó inesperadamente la vista posterior casi tres meses, señalándola para el 15 de septiembre de 2019. El tribunal no dio ninguna explicación para justificar un retraso tan importante, salvo que el presidente del tribunal estaría de vacaciones. La fuente considera que este razonamiento no es satisfactorio, habida cuenta del largo historial de demoras innecesarias en este caso, incluso después de que se anulara la condena el 5 de mayo de 2019, y plantea nuevas dudas sobre la gestión judicial del caso.

44. La fuente también afirma que, tras su puesta en libertad, la Sra. Lazareva fue sometida a control y vigilancia por varias personas que se desplazaban en tres automóviles. Esa vigilancia se ha mantenido mientras la Sra. Lazareva ha permanecido en libertad provisional con fianza, a pesar de que no se tiene constancia de ninguna orden judicial que prescriba tal injerencia en su libertad. Con arreglo a la legislación kuwaití, solo se puede autorizar una vigilancia de esas características mediante orden judicial. La fuente señala que la Sra. Lazareva fue sometida a la misma vigilancia extrajudicial permanente cuando estuvo en libertad provisional con fianza entre el 7 de febrero de 2018 y el 6 de mayo de 2018, fecha de su condena. Según la fuente, este considerable grado de intimidación y acoso sigue afectando a la salud de la Sra. Lazareva. Además, cualquier persona que se reúna con la ella también es seguida por personal de vigilancia, una medida que parece concebida para intimidar y disuadir a quienes tratan de apoyarla. La vigilancia y el control se extienden al equipo jurídico internacional de la Sra. Lazareva.

45. La fuente añade que la Sra. Lazareva sigue sujeta a la prohibición de viajar en el marco de las causas núms. 1942/2015 y 1496/2012. Sin embargo, sostiene que no hay ninguna razón plausible para que se mantengan estas restricciones. Las prohibiciones de viajar están resultando particularmente problemáticas, dado que existen razones humanitarias de peso y urgentes para permitirle viajar.

46. Además, la fuente sostiene que la Sra. Lazareva sigue siendo objeto de procedimientos judiciales injustificados. En la causa núm. 1496/2012, relativa a denuncias de apropiación indebida de fondos, la fuente explica que no hay indicios de que se hayan robado o desviado fondos como se ha alegado ni de ninguna otra manera. Después de más de ocho meses de inactividad, se celebró una vista el 5 de agosto de 2019, pero el tribunal no adoptó ninguna medida concreta. En cambio, se señaló una nueva vista para el 9 de septiembre de 2019, en la que se presentarían los alegatos finales y las conclusiones de la defensa. Por consiguiente, la fuente sostiene que no hay suficientes pruebas que justifiquen la continuación de las actuaciones. Preocupa a la fuente que, a pesar de haber permanecido inactiva desde el 17 de diciembre de 2018, esta causa se haya reabierto en lugar de sobreeserse, como salta a la vista que se debería haber hecho. Para la fuente, el hecho de que la reapertura de la causa núm. 1496/2012 coincida con la revocación por parte del tribunal de la condena impuesta en la causa núm. 1942/2015 (actualmente, causa núm. 1596/2018, ante el tribunal de apelación) plantea dudas sobre la motivación de las autoridades kuwaitíes y sobre si, como parece, se trata simplemente de un medio para seguir actuando contra la Sra. Lazareva por motivos que escapan al ámbito judicial.

47. Además, la fuente afirma que las autoridades amenazan agresivamente con enjuiciar al equipo jurídico internacional de la Sra. Lazareva por motivos relacionados con su labor profesional. La fuente especifica que en las causas en las que está implicada la Sra. Lazareva interviene de manera destacada una institución gubernamental kuwaití, la Autoridad Portuaria de Kuwait, cuyo director es miembro de la familia gobernante de Kuwait. Según la fuente, la actuación de la Autoridad Portuaria de Kuwait genera, por tanto, la responsabilidad del Estado como cuestión de derecho internacional.

48. Concretamente, la fuente afirma que, el 17 de agosto de 2019, la Autoridad Portuaria de Kuwait emitió un comunicado de prensa en el que amenazaba directamente y en términos claros e inequívocos al equipo jurídico internacional que trabajaba en el caso de la Sra. Lazareva. También criticaba a uno de los bufetes de abogados por haber dado instrucciones legítimas a las personas que trabajaban en el caso de la Sra. Lazareva y condenaba el hecho de que se hubieran presentado denuncias ante los procedimientos especiales de las Naciones Unidas (incluido el Grupo de Trabajo) por supuestas violaciones del Pacto. Para la fuente, esto constituye una represalia. Según la fuente, en el comunicado de prensa se calificaba de “traición” la labor del equipo jurídico de la Sra. Lazareva, incluida su legítima intervención ante los procedimientos especiales de las Naciones Unidas, y se amenazaba a quienes trabajaban en su caso afirmando que se había “advertido” a los asesores de las consecuencias de continuar con su labor. Además, según la fuente, las declaraciones del comunicado de prensa que versan sobre los pagos a estos representantes legales son inexactas. A juicio de la fuente, estas amenazas tienen por objeto socavar la capacidad de la Sra. Lazareva para impugnar legítimamente su reclusión y llamar la atención sobre su carácter arbitrario.

49. Además, estas acciones han hecho que el Estado incumpla sus obligaciones internacionales de garantizar el derecho a un juicio imparcial, por ejemplo al tratar de privar a la Sra. Lazareva de la legítima defensa jurídica de su elección.

50. La fuente también afirma que en el comunicado de prensa se advertía a la Sra. Lazareva sobre la posibilidad de que se le imputaran nuevos cargos penales por traición y violación internacional de la seguridad nacional de Kuwait únicamente en relación con la actuación legítima de su defensa jurídica. En el comunicado de prensa se tachaban las medidas adoptadas por la Sra. Lazareva para hacer valer sus derechos, con la colaboración de personas e instituciones ajenas al sistema de justicia penal kuwaití, de “ataque” contra Kuwait y su Gobierno.

51. La fuente explica que el coacusado de la Sra. Lazareva sigue en prisión a pesar de haber abonado una cantidad suficiente para cubrir la fianza. El hecho de que no haya sido puesto en libertad provisional con fianza, a pesar del auto judicial dictado el 2 de junio de 2019 y del pago de la fianza, es un ejemplo más de las graves irregularidades procesales que se han producido en la causa de la Sra. Lazareva. La fuente sostiene que la razón de que la causa del coacusado no se juzgara el 18 de agosto de 2019, como estaba previsto, es que el tribunal recibió instrucciones directas de un juez de no revisar su puesta en libertad. Esto lleva a la fuente a cuestionar la independencia e imparcialidad de ese juez que, según afirma, ya ha interferido indebidamente en la causa contra la Sra. Lazareva en ocasiones anteriores. Ahora lo hace con mayor frecuencia en causas relacionadas con la Sra. Lazareva. Esto suscita una gran preocupación de cara a las próximas vistas decisivas que se celebrarán en septiembre de 2019 en el marco de las causas contra la Sra. Lazareva, y plantea dudas sobre si esta podrá alguna vez ser sometida a un juicio imparcial.

52. En conclusión, la fuente sostiene que el caso de la Sra. Lazareva pone de manifiesto una prolongada detención arbitraria y un absoluto desprecio por las garantías procesales. Kuwait ya ha mostrado su disposición a volver a encarcelar a la Sra. Lazareva después de períodos de libertad temporales y existe la preocupación de que los siguientes procedimientos sigan sin cumplir las normas internacionales relativas a la imparcialidad de los juicios.

Respuesta del Gobierno

53. El 19 de julio de 2019, el Grupo de Trabajo transmitió las alegaciones de la fuente al Gobierno en el marco de su procedimiento ordinario de comunicaciones. El Grupo de Trabajo pidió al Gobierno que respondiera a más tardar el 17 de septiembre de 2019. El 22 de julio de 2019, el Gobierno solicitó una prórroga, de conformidad con el párrafo 16 de los métodos de trabajo del Grupo de Trabajo, que se le concedió, fijándose como nuevo plazo el 17 de octubre de 2019. El Gobierno presentó su respuesta el 4 de septiembre de 2019. El 10 de septiembre de 2019 se envió al Gobierno una adición a la comunicación, a la que este respondió el 11 de septiembre de 2019 y el 14 de octubre de 2019.

54. En su respuesta de 4 de septiembre de 2019, el Gobierno afirma que la información proporcionada por la fuente tiene por objeto influir en el curso de los procedimientos

judiciales relacionados con la Sra. Lazareva. Fundamentalmente, el Gobierno sostiene que las alegaciones presentadas por la fuente no incluyen ningún documento o prueba que las sustente.

55. El Gobierno declara que la restricción de la libertad de la Sra. Lazareva y todos los procedimientos y juicios contra ella se llevaron a cabo de conformidad con la legislación nacional y las obligaciones internacionales de Kuwait.

56. En su respuesta, el Gobierno confirma que se han abierto dos causas contra la Sra. Lazareva. En la causa núm. 1496/2012, se acusaba a la Sra. Lazareva de haber transferido varias sumas de dinero con el propósito de apropiarse indebidamente de ellas. El 26 de abril de 2017, la Fiscalía dio traslado al tribunal penal de dicha causa, en la que se imputaba a la acusada y a otras personas. El tribunal penal aún está examinándola. En la causa núm. 1942/2015, la Fiscalía examinó todos los documentos e informes técnicos, interrogó a la Sra. Lazareva y la acusó del delito de cooperar en la apropiación indebida de fondos públicos y favorecerla. Estaba previsto que el tribunal de apelación volviese a examinar el asunto el 15 de septiembre de 2019.

57. Por lo que se refiere a las denuncias de trato arbitrario, incluidos los repetidos episodios de detención y reclusión arbitrarias, el Gobierno afirma que se llevó sin demora a la Sra. Lazareva ante la Fiscalía el día de su detención. La Fiscalía le permitió consultar con sus abogados. Todos los interrogatorios se llevaron a cabo en horarios adecuados, teniendo en cuenta la situación de la acusada y poniendo a su disposición alimentos o bebidas según lo solicitaba. El Gobierno confirma que no se sometió a la acusada a ningún procedimiento que restringiera su libertad de ningún modo contrario a las disposiciones y los plazos legales establecidos por la ley. En primer lugar, la Fiscalía ordenó la detención de la acusada el 27 de noviembre de 2017 en el marco de la causa núm. 1942/2015 y esa orden se ejecutó el 28 de noviembre de 2017. Después, permaneció detenida en virtud de una prórroga de 15 días decretada por el juez el 14 de diciembre de 2017. En segundo lugar, la Sra. Lazareva permaneció detenida en espera de juicio después de que se remitiera el caso al tribunal penal el 19 de diciembre de 2017 y fue puesta en libertad por orden judicial el 4 de febrero de 2018. Por último, ingresó en prisión en cumplimiento de la sentencia dictada por el tribunal penal el 5 de mayo de 2018 y fue puesta en libertad en virtud del auto dictado por el tribunal de apelación el 2 de junio de 2019.

58. El Gobierno afirma además que en todo momento se respetaron los derechos de la Sra. Lazareva, ya que nunca se le impidió reunirse con sus abogados y siempre hubo un abogado defensor presente en los seis interrogatorios a los que la sometieron. Según el Gobierno, un intérprete especializado asistió a la acusada en todos los interrogatorios y durante el juicio. Entre el 17 de septiembre de 2018 y el 28 de mayo de 2019, la Sra. Lazareva recibió 25 visitas de sus abogados y 13 visitas de otras personas, incluso durante su estancia en prisión.

59. El Gobierno explica que la cuantía de la fianza es elevada solo porque también lo era la cantidad apropiada indebidamente.

60. El Gobierno afirma que las acusaciones contra la Sra. Lazareva se basaron en pruebas suficientes, entre ellas testimonios de 11 testigos, declaraciones de varios acusados, informes técnicos, documentos bancarios, registros oficiales, actas de reuniones de comités de inspección, anotaciones contables y estados financieros. El Gobierno afirma además, sin dar información más detallada, que todos los testigos de cargo prestaron declaración en vista pública.

61. El Gobierno afirma que el detallado informe pericial de diciembre de 2018 que menciona la fuente nunca se presentó a la Fiscalía. Por otra parte, nada habría impedido a la Sra. Lazareva presentarlo.

62. En cuanto al hecho de que, en un procedimiento civil paralelo, el juez resolviera en otro sentido, el Gobierno afirma que el asunto de ese proceso civil es diferente de los cargos imputados a la acusada en las dos causas penales.

63. Según el Gobierno, no se sometió a vigilancia a la Sra. Lazareva después de su puesta en libertad. El artículo 74 del Código Penal establece que la vigilancia es una pena accesoria,

que se impone tras cumplirse la pena principal asociada a determinados delitos, y que el delito que ha cometido la Sra. Lazareva no es uno de ellos.

64. El Gobierno confirma que todos los procedimientos seguidos con respecto a la Sra. Lazareva fueron legales y válidos. Se llevaron a cabo sobre la base de órdenes judiciales y bajo una supervisión judicial imparcial y justa. Se garantizó plenamente el derecho de la acusada a un juicio imparcial, de conformidad con las normas y los procedimientos establecidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el Pacto.

65. El Gobierno reitera que la Sra. Lazareva disfrutó de todas las garantías legales, como el acceso a un abogado, la exposición de los argumentos de la defensa, el examen de testigos y un juicio imparcial. Se respetaron sus derechos en todos los procedimientos legales y objetivos de conformidad con la Constitución y las leyes del país, así como con los instrumentos internacionales en los que Kuwait es parte y que prevalecen sobre sus leyes nacionales de conformidad con su normativa.

66. El Gobierno afirma que, en el momento de redactar su respuesta, la Sra. Lazareva se encontraba en buen estado físico y no estaba detenida, por lo que podía desplazarse libremente por Kuwait.

67. En su respuesta de 14 de octubre de 2019, el Gobierno rechaza el argumento de la fuente sobre la falta de fundamento jurídico de la reclusión de la Sra. Lazareva desde el 5 de mayo de 2019 hasta el 2 de junio de 2019. El Gobierno explica que se practicó una detención legal en cumplimiento de la sentencia dictada el 6 de mayo de 2018 por el tribunal penal, con arreglo al artículo 214 del Código de Procedimiento y Enjuiciamiento Penal. El 5 de mayo de 2019, el tribunal de apelación resolvió anular la sentencia dictada contra la Sra. Lazareva, que había sido recurrida, y ordenó su puesta en libertad, con la condición de que pagara una garantía económica de 20 millones de dinares. En la vista celebrada el 2 de junio de 2019, se demostró que la Sra. Lazareva no podía pagar la garantía financiera fijada por el tribunal de apelación y la defensa solicitó que se redujera su cuantía. El tribunal decidió reducirla a 1 millón de dinares. El 12 de junio de 2019, la Sra. Lazareva pagó la garantía y fue puesta en libertad.

68. Con respecto a las alegaciones sobre la ausencia de pruebas creíbles que sustenten los cargos contra la Sra. Lazareva en la causa núm. 1942/2015 y en relación con la falsificación de documentos y las diferencias de trato, el Gobierno afirma que la documentación de las investigaciones de la Fiscalía tenía 543 páginas y que se tardó dos años en reunir pruebas en este caso. Esas consistían en el testimonio de 11 testigos, declaraciones de varios acusados, informes y documentos técnicos, registros bancarios, registros oficiales, actas de reuniones de comités de inspección, asientos contables y presupuestos. Además, se ha tratado por igual a la acusada y al personal de la Oficina Estatal de Auditoría y se han respetado los derechos de defensa de ambos. El Gobierno refuta la supuesta alegación, ya que el trámite y la resolución de las causas de los distintos acusados han corrido a cargo de diferentes órganos de conformidad con el artículo 167 de la Constitución y los artículos 4, 7 y 9 del Código de Procedimiento y Enjuiciamiento Penal.

69. En cuanto a la vista aplazada del 9 de junio al 15 de septiembre de 2019, al parecer sin motivo, el Gobierno recuerda en detalle las actas del tribunal e informa de que todos los retrasos se debieron a los aplazamientos solicitados por el abogado defensor de la Sra. Lazareva, del 9 de junio al 29 de septiembre de 2019, y no a una decisión unilateral del tribunal de apelación.

70. El Gobierno también rechaza la afirmación de que se sometió a vigilancia a la Sra. Lazareva después de su puesta en libertad. Esta alegación carece de fundamento, ya que el control policial, previsto en el artículo 74 del Código Penal, es una pena accesoria que se ordena como medida complementaria de la pena principal solo respecto de determinados delitos, entre los que no se encuentran aquellos de los que se acusa a la Sra. Lazareva.

71. La prohibición de viajar impuesta a la Sra. Lazareva se acordó como medida cautelar de conformidad con la ley mencionada. La acusada ejerció todas las garantías legalmente establecidas con respecto a este procedimiento al presentar varias quejas ante los tribunales competentes. Un representante de la Embajada de la Federación de Rusia también hizo

peticiones similares. El tribunal accedió a una de las solicitudes de la Sra. Lazareva en febrero de 2017 y levantó la prohibición de viajar en la causa núm. 1496/2012.

72. El Gobierno también niega las supuestas amenazas al equipo jurídico de la Sra. Lazareva en el comunicado de prensa emitido por la Autoridad Portuaria de Kuwait. Recuerda que la Constitución garantiza el principio de libertad de prensa y cuestiona la veracidad de las declaraciones de la fuente, en las que se tergiversan los hechos.

Observaciones adicionales de la fuente

73. El 4 de septiembre de 2019 se remitió a la fuente la respuesta del Gobierno para que formulara comentarios adicionales. La fuente respondió el 10 de septiembre de 2019 a la primera respuesta del Gobierno y el 31 de enero de 2020 a la segunda respuesta del Gobierno.

74. En su primera respuesta, la fuente argumenta que el auto dictado el 2 de junio de 2019 no cambia el hecho de que, tras la anulación de su condena, la Sra. Lazareva fue privada de libertad ilegalmente. Además, el tribunal no dio ninguna razón para decretar la reclusión de la Sra. Lazareva.

75. La fuente explica que el tribunal aplazó la vista señalada para el 9 de junio de 2019 al 23 de junio de 2019 e indicó que se celebraría una vista definitiva para que la defensa expusiera sus argumentos y se dictaría sentencia unos días después. En la vista celebrada el 23 de junio de 2019, el tribunal aplazó inesperadamente la vista posterior casi tres meses, señalándola para el 15 de septiembre de 2019. El tribunal no dio ninguna explicación para justificar un retraso tan importante, salvo que el presidente del tribunal estaría de vacaciones. La fuente considera que este razonamiento no es satisfactorio y provocó demoras innecesarias en la tramitación de esta causa.

76. La fuente también afirma que, tras su puesta en libertad, la Sra. Lazareva fue seguida por personas que la vigilaban. Esa vigilancia se ha mantenido mientras la Sra. Lazareva ha permanecido en libertad provisional con fianza, a pesar de que no se tiene constancia de ninguna orden judicial que prescriba tal injerencia en su libertad. Con arreglo a la legislación kuwaití, solo se puede autorizar una vigilancia de esas características mediante orden judicial. La fuente señala que la Sra. Lazareva fue sometida a la misma vigilancia extrajudicial permanente cuando estuvo en libertad provisional con fianza, entre el 7 de febrero de 2018 y el 6 de mayo de 2018, fecha de su condena. Según la fuente, este considerable grado de intimidación y acoso sigue afectando a la salud de la Sra. Lazareva.

77. Además, la fuente sostiene que la Sra. Lazareva sigue siendo objeto de procedimientos judiciales injustificados. Después de más de ocho meses de inactividad, se celebró una vista el 5 de agosto de 2019, pero el tribunal no adoptó ninguna medida concreta. En cambio, se señaló una nueva vista para el 9 de septiembre de 2019, en la que se presentarían los alegatos finales y las conclusiones de la defensa. Por consiguiente, la fuente sostiene que no hay suficientes pruebas que justifiquen la continuación del caso. Para la fuente, el hecho de que la reapertura de la causa núm. 1496/2012 coincida con la revocación por parte del tribunal de la condena impuesta en la causa núm. 1942/2015 (actualmente, causa núm. 1596/2018, ante el tribunal de apelación) plantea dudas sobre la motivación de las autoridades kuwaitíes y sobre si, como parece, se trata simplemente de un medio para seguir actuando contra la Sra. Lazareva por motivos que escapan al ámbito judicial.

78. En su segunda respuesta, la fuente rechaza la respuesta del Gobierno con respecto a los presuntos actos de represalia contra la Sra. Lazareva y reitera sus afirmaciones.

79. En cuanto a la cuestión de los documentos falsificados, la fuente afirma que el Gobierno no niega que los documentos fueran falsificados. En cambio, insiste en el hecho de que los acusados fueron juzgados por distintos órganos, lo que, en opinión de la fuente, demuestra la falta de conocimiento y respeto por parte del Gobierno de las garantías procesales, incluido el derecho a la presunción de inocencia.

80. La fuente reitera sus argumentos de que la privación de libertad de la Sra. Lazareva vulneró el derecho nacional e internacional, argumentos que el Gobierno no logró refutar.

Deliberaciones

81. El Grupo de Trabajo agradece a la fuente y al Gobierno sus extensas comunicaciones.

82. El Grupo de Trabajo acoge con satisfacción la puesta en libertad de la Sra. Lazareva el 12 de junio de 2019. De conformidad con el párrafo 17 a) de sus métodos de trabajo, no obstante la puesta en libertad de la persona en cuestión, el Grupo de Trabajo se reserva el derecho de emitir una opinión sobre el carácter arbitrario o no de la privación de libertad. En el presente caso, según la fuente, la Sra. Lazareva fue detenida el 28 de noviembre de 2017 y permaneció privada de libertad durante más de 440 días. Además, la fuente formula acusaciones sustanciales sobre violaciones de los derechos humanos por parte del Gobierno, que merecen ser examinadas. Por esas razones, el Grupo de Trabajo considera que sigue siendo necesaria una decisión razonada a pesar de la puesta en libertad.

83. Para pronunciarse sobre si la privación de libertad de la Sra. Lazareva fue arbitraria, el Grupo de Trabajo tiene en cuenta los principios establecidos en su jurisprudencia para proceder en relación con las cuestiones probatorias. Si la fuente ha presentado indicios razonables de una vulneración de los requisitos internacionales constitutiva de detención arbitraria, debe entenderse que la carga de la prueba recae en el Gobierno en caso de que desee refutar las alegaciones (véase A/HRC/19/57, párr. 68). El Grupo de Trabajo recuerda que, cuando se aduce que una autoridad pública no ha concedido a alguien ciertas garantías procesales a las que tiene derecho, la carga de la prueba debe recaer en esa autoridad, porque está en mejores condiciones de demostrar que ha seguido los debidos procedimientos y aplicado las garantías que exige la ley⁹.

84. Como cuestión preliminar, el Grupo de Trabajo observa que las partes han presentado extensas comunicaciones, que superan el límite máximo de páginas, y que la fuente presentó actualizaciones con nuevas alegaciones, que hubo que notificar al Gobierno para darle la oportunidad de responder. El Grupo de Trabajo recuerda que el límite es de 20 páginas, de conformidad con los párrafos 11 y 15 de sus métodos de trabajo, lo que tiene por objeto facilitar el examen oportuno de las comunicaciones.

85. La fuente alega que la privación de libertad de la Sra. Lazareva es arbitraria y se inscribe en las categorías I y III, mientras que el Gobierno lo niega. El Grupo de Trabajo procederá a examinar cada una de esas categorías por separado.

i) Categoría I

86. El Grupo de Trabajo observa, a la luz de las comunicaciones de las dos partes, que la Sra. Lazareva fue detenida el 28 de noviembre de 2017, en el marco de la causa núm. 1942/2015, en cumplimiento de una orden de la Fiscalía. Ese mismo día fue llevada a comparecer ante la Fiscalía; su interrogatorio continuó al día siguiente y se prolongó hasta el 3 de diciembre de 2017. A continuación, la Fiscalía dictó un auto de prisión preventiva, que un juez prorrogó el 14 de diciembre de 2017. La fuente añade que el escrito de acusación se presentó el 19 de diciembre de 2017. Por consiguiente, el Grupo de Trabajo observa que pasaron 16 días antes de que se llevara a la Sra. Lazareva ante una autoridad judicial para que se controlara la legalidad de su reclusión. Conforme al artículo 9, párrafo 3, del Pacto, toda persona detenida o presa a causa de una infracción penal será llevada sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales. Como ha señalado el Comité de Derechos Humanos, un plazo de 48 horas es normalmente suficiente para trasladar a la persona y preparar la vista judicial, con lo que se cumpliría el requisito de llevar a la persona detenida “sin demora” ante un juez; todo plazo superior deberá obedecer a circunstancias excepcionales y estar justificado por ellas¹⁰. El Grupo de Trabajo considera que no se llevó a la Sra. Lazareva sin demora ante una autoridad judicial, en contravención del artículo 9, párrafo 3, del Pacto. El Grupo de Trabajo recuerda que la fiscalía no puede considerarse una autoridad judicial a los efectos del artículo 9, párrafo 3, del Pacto¹¹. En

⁹ Véase, por ejemplo, la opinión núm. 51/2018, párr. 75.

¹⁰ Observación general núm. 35 (2014), párrs. 32 y 33.

¹¹ *Ibid.*, párr. 32; A/HRC/45/16/Add.1, párr. 35; y opiniones núms. 14/2015, párr. 28; 5/2020, párr. 72; 6/2020, párr. 47; y 41/2020, párr. 60.

consecuencia, las autoridades no establecieron el fundamento jurídico de la reclusión de conformidad con las disposiciones del Pacto.

87. Además, la fuente informa de que la Sra. Lazareva permaneció recluida desde el 27 de noviembre de 2017 hasta el 7 de febrero de 2018, cuando fue puesta en libertad provisional con fianza. Después, el 6 de mayo de 2018, fue condenada a 10 años de prisión y trabajos forzados en la causa núm. 1942/2015. Sin embargo, el 5 de mayo de 2019, el tribunal de apelación anuló su sentencia y se ordenó la celebración de un nuevo juicio. La fuente sostiene que no se dictó auto de prisión contra ella hasta el 2 de junio de 2019. Posteriormente, fue puesta en libertad provisional con fianza el 12 de junio de 2019. Por consiguiente, la fuente sostiene que no había fundamento jurídico para su reclusión entre el 5 de mayo y el 2 de junio de 2019. El Gobierno, por su parte, explica que el 5 de mayo de 2019 el tribunal de apelación resolvió anular la sentencia dictada contra la Sra. Lazareva, que había sido recurrida, y ordenó su puesta en libertad, con la condición de que pagara una garantía económica de 20 millones de dinares; en caso contrario, permanecería recluida mientras el caso estuviese pendiente. En la vista celebrada el 2 de junio de 2019, se redujo la cuantía de la fianza. La nueva fianza se pagó el 12 de junio de 2019, lo que permitió su puesta en libertad. En vista de estos argumentos, el Grupo de Trabajo no está convencido de que el Gobierno haya vulnerado el artículo 9 del Pacto.

88. La fuente sostiene que la prisión preventiva de la Sra. Lazareva no estaba justificada, ya que no existía riesgo de fuga, y cuestiona la cuantía de la fianza, por considerar que no tiene precedentes. Afirma que la decisión del tribunal con respecto a la cuantía de la fianza fue discriminatoria. El Gobierno responde que la cuantía se fijó teniendo en cuenta la cantidad total de la que presuntamente se había apropiado indebidamente. A la luz de los argumentos del Gobierno sobre la necesidad de mantener a la Sra. Lazareva en prisión preventiva y del hecho de que la cuantía de la fianza en sí misma no basta para determinar si se ha conculcado el Pacto, el Grupo de Trabajo no puede llegar a una conclusión con respecto a la evaluación individual de su prisión preventiva.

89. La fuente también sostiene que se ha negado a la Sra. Lazareva la oportunidad de impugnar su reclusión y que las autoridades judiciales no han sopesado debidamente la posibilidad de ponerla en libertad provisional con fianza. El Gobierno explica que se solicitó la libertad provisional con fianza en las vistas de diciembre de 2018, que el tribunal ordenó su puesta en libertad provisional con fianza el 4 de febrero de 2018 y de nuevo el 5 de mayo de 2019 y que el 2 de junio de 2019 se dictó un nuevo auto por el que se redujo la fianza. El Grupo de Trabajo observa que se realizó una evaluación individual la posibilidad de su puesta en libertad, lo que condujo a su puesta en libertad provisional con fianza más de dos meses después de su detención. Por consiguiente, el Grupo de Trabajo no puede concluir que se haya producido una vulneración del artículo 9, párrafo 4, del Pacto, como sugiere la fuente.

90. Así pues, el Grupo de Trabajo llega a la conclusión de que el Gobierno vulneró el artículo 9, párrafo 3, del Pacto y el artículo 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, lo que hace que la privación de libertad de la Sra. Lazareva sea arbitraria con arreglo a la categoría I.

ii) *Categoría III*

91. La fuente ha alegado que hubo numerosos casos en los que no se cumplieron unos criterios mínimos de imparcialidad en los procedimientos, cuestión que el Grupo de Trabajo analizará a continuación.

92. La fuente informa de que el magistrado presidente se inhibió del caso y más adelante desistió de la inhibición, todo ello sin dar explicación alguna. El Gobierno tuvo la oportunidad de rebatir esta alegación, pero no lo hizo. El Grupo de Trabajo recuerda que no solo deben motivarse las decisiones judiciales, sino que también es preciso explicar cualquier revocación. El Grupo de Trabajo considera que es difícil desistir de una inhibición si no hay motivos excepcionales y que el órgano judicial debe dar a las partes, especialmente a la acusada, una explicación detallada sobre los motivos de su inhibición. La falta de explicación en este caso puso en peligro el derecho de la Sra. Lazareva a un juicio imparcial porque la defensa no tenía medios para saber si el hecho de que el juez no se hubiera inhibido tendría alguna repercusión en el procedimiento y no podía impugnar el razonamiento.

93. La fuente también informa de que la defensa no tuvo acceso a la totalidad del expediente y que no dispuso de tiempo suficiente para examinar la ingente documentación del caso. El Gobierno no ha refutado de manera significativa esa alegación. Dado el volumen de la documentación del caso, la defensa necesitaba un tiempo apropiado para poder examinarla y organizar su propia labor y su estrategia. Si no se concede a la defensa el tiempo necesario para examinar los documentos, la comunicación de estos carece de sentido. En el presente caso, se dio a la defensa una semana para revisar las aproximadamente 18.000 páginas de los documentos comunicados. El Gobierno no ha dado ninguna explicación al respecto. El artículo 14, párrafo 3 b), del Pacto dispone que toda persona acusada de un delito debe disponer del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa. Al Grupo de Trabajo le resulta difícil aceptar que se haya cumplido este requisito en el presente caso y que el tiempo concedido a la defensa fuera suficiente para estudiar los cargos en una causa de tal complejidad. No obstante, la fuente tampoco ha explicado si los abogados de la defensa solicitaron que se les otorgara más tiempo ni si esas solicitudes fueron denegadas. Sin esta información, el Grupo de Trabajo no está en condiciones de concluir que se haya quebrantado el artículo 14, párrafo 3 b), del Pacto¹².

94. La fuente alega que se impidió a la Sra. Lazareva estar presente en algunas vistas, por ejemplo, el 14 de enero de 2018. El Gobierno no ha refutado esta alegación. El Comité recuerda que, en virtud del artículo 14, párrafo 3 d), del Pacto, toda persona acusada tiene derecho a hallarse presente en el proceso. Toda negación del derecho a estar presente en el propio juicio debe estar debidamente justificada y sujeta a restricciones. Habida cuenta de que el Gobierno no ha explicado la situación, el Grupo de Trabajo llega a la conclusión de que se ha violado el derecho a estar presente en el propio juicio.

95. La fuente sostiene que un abogado kuwaití del equipo de defensa de la Sra. Lazareva fue enjuiciado por su trabajo. El Gobierno afirma que se investigó al abogado por haber insultado a un funcionario público. Además, la fuente ha informado de presuntas represalias contra los abogados de la defensa, que el Gobierno ha refutado. El Grupo de Trabajo no queda convencido por la respuesta del Gobierno, que no aporta pruebas.

96. El Grupo de Trabajo también observa con preocupación las denuncias de intimidación grave de los abogados, lo que constituye una grave injerencia en el derecho a la asistencia letrada, en contravención del artículo 14, párrafo 3 b) y d), del Pacto. El Estado tiene la obligación jurídica y positiva de proteger a todas las personas que se encuentren en su territorio o bajo su jurisdicción contra toda violación de los derechos humanos y de proporcionar vías de recurso cuando se produzca una violación. El Grupo de Trabajo recuerda en particular que, de conformidad con el principio 9 de los Principios y Directrices Básicos de las Naciones Unidas sobre los Recursos y Procedimientos relacionados con el Derecho de Toda Persona Privada de Libertad a Recurrir ante un Tribunal, “[l]os abogados deben poder desempeñar sus funciones con eficacia e independencia, sin miedo a represalias, injerencias, intimidación, obstáculos o acoso” (A/HRC/30/37, anexo, párr. 15)¹³. El Grupo de Trabajo considera que debe remitirse el presente caso al Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados para que lo siga examinando.

97. La fuente alega además que la defensa no pudo interrogar a los testigos sin injerencias indebidas. En algunos casos, la defensa no pudo llamar a declarar a los testigos que necesitaba y, en otros casos, no se le permitió interrogar a los testigos de cargo ni a otros testigos. El Gobierno ha facilitado información detallada sobre estas cuestiones y el Grupo de Trabajo, habida cuenta de las alegaciones generales de la fuente, no puede determinar si se violaron los derechos de la defensa en este sentido.

98. La fuente afirma que algunas de las pruebas no se tradujeron o las traducciones no entregaron a tiempo. Además, se proporcionó una traducción al ruso en vez de al inglés, que es el idioma común de la defensa, y no era de buena calidad. El Gobierno rechazó estas afirmaciones. El Grupo de Trabajo recuerda que el derecho a ser asistido gratuitamente por un intérprete si el acusado no comprende o no habla el idioma empleado en el tribunal,

¹² Opinión núm. 2/2018, párr. 66.

¹³ Véanse las opiniones núms. 29/2017, 70/2017 y 66/2019. Véase también la opinión núm. 14/2017, párr. 58.

conforme a lo dispuesto en el artículo 14, párrafo 3 f) del Pacto, consagra otro aspecto de los principios de la equidad y la igualdad de medios en los procesos penales¹⁴. No obstante, el Grupo de Trabajo observa que el Comité de Derechos Humanos ha declarado que es importante para garantizar un juicio imparcial que la defensa tenga la oportunidad de familiarizarse con las pruebas documentales contra la persona acusada, pero ello no implica que un acusado que no entienda el idioma empleado en el tribunal tenga derecho a que se le proporcionen traducciones de todos los documentos pertinentes en una investigación penal, siempre y cuando se pongan esos documentos a disposición de su abogado¹⁵. En el caso que nos ocupa, el Grupo de Trabajo observa que la Sra. Lazareva tenía abogados que hablaban árabe y que, en algunos casos, se le proporcionaron traducciones de los documentos. En estas circunstancias, el Grupo de Trabajo no puede concluir que se haya vulnerado el artículo 14, párrafo 3 f) en el presente caso.

99. La fuente también informa de que la Sra. Lazareva no pudo celebrar consultas privadas y confidenciales con sus abogados, ya que las reuniones tuvieron lugar en espacios públicos o en presencia de agentes. El Grupo de Trabajo recuerda que el derecho a comunicarse con el defensor exige que se garantice al acusado el pronto acceso a su abogado, que debe poder reunirse con su cliente en privado y comunicarse con él en condiciones que garanticen plenamente el carácter confidencial de sus comunicaciones¹⁶. En el presente caso, el Grupo de Trabajo observa que el Gobierno ha facilitado una lista con las fechas de las consultas de los abogados con la Sra. Lazareva mientras permanecía recluida, pero no ha dado ninguna explicación sobre la falta de privacidad durante esas reuniones. Por consiguiente, el Grupo de Trabajo concluye que en el presente caso ha habido una vulneración del artículo 14, párrafo 3 b), del Pacto.

100. La fuente presenta muchos otros argumentos que no están suficientemente fundamentados o que atañen a un análisis de la legislación nacional o a la cuestión de la inocencia de la Sra. Lazareva, lo que queda fuera del mandato del Grupo de Trabajo, que, por lo tanto, no se ocupará de estos argumentos.

101. En vista de lo que antecede, los casos de violaciones del derecho a un juicio imparcial consagrado en el artículo 14 del Pacto y en el artículo 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, considerados conjuntamente, son lo suficientemente graves como para que el Grupo de Trabajo llegue a la conclusión de que la detención de la Sra. Lazareva fue arbitraria con arreglo a la categoría III.

Decisión

102. En vista de lo anterior, el Grupo de Trabajo emite la siguiente opinión:

La privación de libertad de Maria Lazareva es arbitraria, por cuanto contraviene los artículos 9 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los artículos 9 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y se inscribe en las categorías I y III.

103. El Grupo de Trabajo pide al Gobierno de Kuwait que adopte las medidas necesarias para remediar la situación de la Sra. Lazareva sin dilación y ponerla en conformidad con las normas internacionales pertinentes, incluidas las dispuestas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

104. El Grupo de Trabajo considera que, teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso, el remedio adecuado sería conceder a la Sra. Lazareva el derecho efectivo a obtener una indemnización y otros tipos de reparación, de conformidad con el derecho internacional.

¹⁴ Comité de Derechos Humanos, observación general núm. 32 (2007), párr. 40.

¹⁵ *Harward c. Noruega* (CCPR/C/51/D/451/1991), anexo, párrs. 9.4 y 9.5.

¹⁶ Comité de Derechos Humanos, observación general núm. 32 (2007), párr. 34. Véanse también las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela), regla 61, párr. 1; el Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión, principio 18; y los Principios y Directrices Básicos de las Naciones Unidas, directriz 8.

105. El Grupo de Trabajo insta al Gobierno a que lleve a cabo una investigación exhaustiva e independiente de las circunstancias en torno a la privación arbitraria de libertad de la Sra. Lazareva y adopte las medidas pertinentes contra los responsables de la violación de sus derechos.

106. De conformidad con el párrafo 33 a) de sus métodos de trabajo, el Grupo de Trabajo remite el presente caso al Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados para que tome las medidas correspondientes.

107. El Grupo de Trabajo solicita al Gobierno que difunda la presente opinión por todos los medios disponibles y lo más ampliamente posible.

Procedimiento de seguimiento

108. De conformidad con el párrafo 20 de sus métodos de trabajo, el Grupo de Trabajo solicita a la fuente y al Gobierno que le proporcionen información sobre las medidas de seguimiento adoptadas respecto de las recomendaciones formuladas en la presente opinión, en particular:

- a) Si se han concedido indemnizaciones u otras reparaciones a la Sra. Lazareva;
- b) Si se ha investigado la violación de los derechos de la Sra. Lazareva y, de ser así, el resultado de la investigación;
- c) Si se han aprobado enmiendas legislativas o se han realizado modificaciones en la práctica para armonizar las leyes y las prácticas de Kuwait con sus obligaciones internacionales de conformidad con la presente opinión;
- d) Si se ha adoptado alguna otra medida para aplicar la presente opinión.

109. Se invita al Gobierno a que informe al Grupo de Trabajo de las dificultades que pueda haber encontrado en la aplicación de las recomendaciones formuladas en la presente opinión y a que le indique si necesita asistencia técnica adicional, por ejemplo mediante una visita del Grupo de Trabajo.

110. El Grupo de Trabajo solicita a la fuente y al Gobierno que proporcionen la información mencionada en un plazo de seis meses a partir de la fecha de transmisión de la presente opinión. No obstante, el Grupo de Trabajo se reserva el derecho de emprender su propio seguimiento de la opinión si se señalan a su atención nuevos motivos de preocupación en relación con el caso. Este procedimiento de seguimiento permitirá al Grupo de Trabajo mantener informado al Consejo de Derechos Humanos acerca de los progresos realizados para aplicar sus recomendaciones, así como de todo caso en que no se haya hecho nada al respecto.

111. El Grupo de Trabajo recuerda que el Consejo de Derechos Humanos ha alentado a todos los Estados a que colaboren con el Grupo de Trabajo, y les ha pedido que tengan en cuenta sus opiniones y, de ser necesario, tomen las medidas apropiadas para remediar la situación de las personas privadas arbitrariamente de libertad, y a que informen al Grupo de Trabajo de las medidas que hayan adoptado¹⁷.

[Aprobada el 28 de agosto de 2020]

¹⁷ Resolución 42/22 del Consejo de Derechos Humanos, párrs. 3 y 7.